

Líder de grupo anticastrista acusado de fraude millonario

Por IVAN ROMAN

Redactor de El Nuevo Herald

10-13-93-1

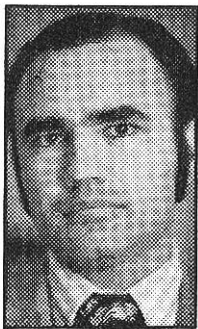
Doce personas, entre las que se encuentra Huber Matos Araluce, secretario de prensa del grupo anticastrista Cuba Independiente y Democrática (CID), fueron encausadas por defraudar al gobierno en más de \$5 millones mediante reclamos falsos e innecesarios de Medicare y Medicaid.

Un gran jurado en Miami determinó que Matos, quien está fuera del país, y su socia, Juana Mayda Pérez Batista, de 36 años, obtuvieron el dinero fraudulentamente, al hacer que usuarios de Medicaid o Medicare se sometieran a análisis y otros servicios médicos innecesarios.

Se les acusó, además, de lavar el dinero al depositarlo en cuentas bancarias de Publiart y Publi-mark, dos corporaciones florida-

nas que se alega operaban.

Este es el más reciente de varios casos de fraude multimillonario con fondos de Medicare que han terminado en acusaciones formuladas por la fiscalía federal en Miami.



Matos

En el auto de acusación de 52 páginas, también se acusa a varios empleados de la clínica Florida Medical & Diagnostic Center, Inc., 965 West Flagler Street, de conspirar con Pérez y Matos, y a cinco personas que recibían pagos por "reclutar" pacientes con Medicaid y Medicare para la clínica.

Líder de grupo anticastrista acusado de fraude al Medicare

10-13-93-8

ACUSACION, DE 1A

Las acusaciones, selladas desde marzo pasado, fueron divulgadas el martes luego que Pérez fue arrestada el viernes en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en Nueva York al llegar de Venezuela.

Huber Matos, padre de Huber Matos Araluce y secretario general del CID, dijo que su hijo estaba fuera del país, aunque no especificó dónde. Fuentes aseguran que Matos Araluce, de 49 años, está en Costa Rica, donde vivió por muchos años y de donde es oriunda su esposa.

Matos dijo que su hijo esperaba alguna acusación de este tipo, y que es un tercer intento por desacreditarlo. Señaló como ejemplo anterior cuando en 1988 se le acusó a él, a su hijo, y al CID, de conspirar para asesinar a Jorge Mas Canosa, presidente de la junta de directores de la Fundación Nacional Cubano Americana.

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) investigó esas acusaciones y no encontró razón para formular cargos.

"Estamos convencidos de que

‘Este encausamiento no se basa en genealogía o política. Se basa sólo en hechos’.

Portavoz de la fiscalía **DAN GELBER**

en el fondo de esto hay un propósito político para hacerle daño al CID y a nosotros", explicó Matos padre, quien fundó la organización en 1981. "En ningún momento he dudado de la honestidad de mi hijo. A la larga estará esclarecido quiénes son los que están detrás de esto".

Dan Gelber, portavoz de la fiscalía federal en Miami, refutó esas alegaciones.

"Este encausamiento no se basa en genealogía o política", afirmó. "Se basa sólo en hechos".

La acusación dice que entre octubre de 1989 y febrero de 1992, Matos Araluce y Pérez, con dos empleados de la clínica, Carlos J. Lastres, de 31 años, y José Matute, de 38 años, pagaban entre \$30 y \$150 a cinco mujeres para que buscaran usuarios de Medicare y Medicaid y los envia-

ran a la clínica.

Las acusadas de recibir pagos por reclutar usuarios son Amanda Ibarra, de 46 años; Martha Agüero, de 52 años; Concepción Gil, de 50 años; Nancy Foster, de 54 años; y Azucena Pérez, de 40 años.

Una vez que los pacientes eran atendidos por médicos, uno de ellos sin licencia para ejercer medicina, los enviaban a Test & Diagnostic Center, Inc., compañía de análisis en la misma dirección, y Multi-Specialists, Inc., grupo de especialistas localizados al lado.

En los tres lugares se les hacía pruebas, reconocimientos o servicios innecesarios por los cuales se remitía una factura a Medicaid o Medicare. Además, se les enviaba a veces a Elmes Corp., que proporcionaba equipo médico a los

pacientes.

A los reclutadores se les dijo que podrían recibir \$150 adicionales por cada equipo que sus pacientes aceptaran. También se les aclaró que no les pagarían si sus pacientes no se sometían a todas las pruebas ordenadas por la clínica y otras oficinas.

Además de Matute y Lastres, hay otros empleados acusados de participar en la confabulación: Gladys Soberón, de 61 años;

Vicente Mompo, de 70 años, médico, y Gilberto Rodríguez-Abreu, de 44 años, identificado en el encausamiento como médico sin licencia para ejercer.

En toda la documentación y los cobros se usaba la firma del médico con licencia, aunque nunca hubiera examinado al paciente. Las fechas de las visitas y pruebas eran alteradas para esconder el fraude, y el médico sin licencia inventaba informa-

ción en los historiales de los pacientes para justificar las numerosas pruebas.

El martes por la tarde, sólo se había arrestado a Pérez Batistá, quien compareció ante un magistrado federal en Nueva York el domingo, el cual ordenó la trasladaran a Miami.

Matos encara hasta 820 años tras las rejas y \$25 millones en multas, mientras que Pérez se enfrenta a 1,720 años de cárcel y \$4.75 millones en multas.